

TIPO DE JUICIO: NULIDAD.

EXPEDIENTE: TJA/5ªSERA/JRAEM-049/2025.

PARTE ACTORA: [REDACTED]
[REDACTED].

AUTORIDADES DEMANDADAS:

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DE
CUERNAVACA, MORELOS Y OTRAS.

MAGISTRADO: JOAQUÍN ROQUE
GONZÁLEZ CEREZO.

SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN:
FERNANDA MARYLE ALONSO
MARTÍNEZ.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
ANA MARÍA ROMERO CAJIGAL.

Cuernavaca, Morelos, a veinte de mayo del dos mil veintiséis.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

SENTENCIA que se emite dentro de los autos del expediente número **TJA/5ªSERA/JRAEM-049/2025**, promovido por [REDACTED] [REDACTED] contra actos del **Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca; Morelos y otras**, en la que se determinó el sobreseimiento del juicio de nulidad interpuesto en contra de la resolución definitiva de fecha [REDACTED]

██████████, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente ██████████ mediante la cual se le sancionó al actor con la remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización, por operar su **sobreseimiento** en términos de los artículos 37 fracciones VII y 38 fracción II de la *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*, ya que el acto impugnado fue materia de otro juicio; declarando **improcedente** las indemnizaciones consistentes en tres meses de emolumentos y la de veinte días por cada año de servicios, los emolumentos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, despensa familiar mensual, la afiliación a un sistema principal de seguridad social como son el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; acceso a Créditos para obtener vivienda el disfrute de un seguro de vida; recibir el equipo material necesario para desempeñar la función; contar con un bono de riesgo, ayuda para transporte; los beneficios derivados de riesgos y enfermedades, maternidad y paternidad que se generen desde la fecha de la separación hasta que se dé cabal y debido cumplimiento a la resolución; el pago de sus emolumentos devengados y no pagados del dieciséis de agosto al veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés; la indemnización por tiempo perdido que prevé el artículo 325 de la *Ley Federal del Trabajo*, el reclamo de daño moral; el pago de interés legal del 9% anual capitalizable de todas y cada una de las pretensiones; la reparación de los daños y perjuicios. Asimismo, se **condena** al pago de la prima de antigüedad; entrega de la Hoja de Servicios y la Carta de

Salarios; la devolución de los documentos originales consistentes en certificados de estudios y cartilla militar; al siguiente tenor:

2. GLOSARIO

Parte actora: [REDACTED]

Autoridades
demandadas en la
demanda inicial:

- 1. Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca; Morelos¹;
- 2. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca; Morelos;² y
- 3. H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos

Autoridad
demandada en la
ampliación de la
demanda:

Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca; Morelos.

Acto Impugnado:

Resolución definitiva de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del

¹ Denominación correcta del cargo en términos de la contestación de demanda que obra a fojas 86 de este expediente.
² Denominación Correcta de acuerdo al acto impugnado.

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente [REDACTED], seguido en contra de la **parte actora**, mediante la cual se le sancionó con la remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización.³

LJUSTICIAADMVAM: *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.*⁴

LORGTJAEMO: *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*⁵.

LSSPEM: *Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.*⁶

LSEGSOCSPPEM: *Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.*

³ Acto impugnado precisado en la presente sentencia.

⁴ Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

⁵ Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

⁶ Publicada el 24 de agosto de 2009, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 4735 y vigente para resolver el presente asunto en términos de la disposición transitoria SEXTA de la *Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos*, publ cada el 31 de diciembre de 2025, publicada en el en el periódico oficial "Tierra y Libertad", número 6510, que dispone:

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor de la presente Ley, serán resueltos conforme a lo dispuesto por la Ley que se abroga.

LSERCIVILEM *Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.*

CPROCIVILEM: *Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.*

Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Con fecha once de febrero de dos mil veinticinco, compareció la **parte actora**, por su propio derecho ante este **Tribunal** a promover Juicio de Nulidad en contra de actos de las **autoridades demandadas**, misma que por auto de fecha dieciocho de ese mismo mes y año fue admitida su demanda, señalando como actos impugnados:

"1) Resolución definitiva de fecha [REDACTED] (se desconoce la fecha exacta de la resolución pues jamás se ha tenido acceso a la misma ni al expediente del cual se emana, únicamente se tiene conocimiento de su existencia derivado de un informe al cual recientemente tuve acceso como se establecerá de manera clara en los hechos de la presente) mediante la cual se declara la baja y/o cese de la relación administrativa que se una con la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dictada dentro del procedimiento administrativo [REDACTED] y

2).la remoción y/o terminación de la relación administrativa que me unía con la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos..." (Sic)

En consecuencia, con copias simples de la demanda y documentos que la acompañaron, se ordenó emplazar a las **autoridades demandadas**, para que en un plazo improrrogable de diez días produjeran contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de Ley.

2. Por acuerdos de fechas veintiséis, veintisiete y veintiocho de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo a las **autoridades demandadas en la demanda inicial** dando contestación a la demanda entablada en su contra, por anunciadas las pruebas y se ordenó dar vista a la **parte actora** por el plazo de tres días. Así mismo se hizo del conocimiento sobre su derecho para ampliar la demanda en el término de quince días hábiles.

3. Con fecha veintidós de abril de dos mil veinticinco, se le tuvo a la **parte actora** por desahogada la vista respecto al escrito de contestación de las **autoridades demandadas**.

4. Por acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil veinticinco, se tuvo a la **parte actora** haciendo valer su derecho de ampliar la demanda en contra del **Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca; Morelos**, por los actos impugnados consistentes en:

“... el ilegal pronunciamiento administrativo [REDACTED] mediante el cual se decretó la remoción del suscrito como elemento policiaco...”

“... todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo [REDACTED]”

“... Acuerdo de inicio de procedimiento de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada dentro de los autos del procedimiento [REDACTED]”

“... constancia de notificación de fecha 13 de octubre de 2023, dictada dentro de los autos del procedimiento [REDACTED].” (Sic)

En consecuencia, con copias simples de la demanda, se ordenó emplazar a la **autoridad demandada en la ampliación de la demanda**, para que en un plazo improrrogable de diez días produjera contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de Ley.

5. Por acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil veintiséis, se tuvo a la **autoridad demandada en la ampliación de la demanda** dando contestación a la demanda entablada en su contra, por anunciadas las pruebas y se ordenó dar vista a la **parte actora** por el plazo de tres días.

6. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se le tuvo a la **parte actora** por desahogada la vista respecto al escrito de contestación de la **autoridad demandada** a la ampliación de la demanda.

7. Por auto de fecha tres de octubre de dos mil veinticinco, se ordenó abrir el juicio a prueba por el plazo común de cinco días para las partes.

8. Mediante proveído de fecha veinticuatro de octubre dos mil veinticinco, se les tuvo a la actora por ratificadas sus pruebas y a las autoridades demandas por perdido su derecho para ofrecer y ratificar sus pruebas; admitiendo las que así procedieron en términos de los artículos 53⁷ de la **LJUSTICIAADMVAM** y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia de Ley.

9. Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco, se llevó a cabo la audiencia de Ley, haciéndose constar que no comparecieron las partes a pesar de encontrarse debidamente notificadas, desahogándose las pruebas admitidas y se continuó con la etapa de alegatos, sin que ninguna de ellas los formulara, por ello se les tuvo por

⁷ **Artículo 53.** Las Salas podrán acordar, de oficio, el desahogo de las pruebas que estimen pertinentes para la mejor decisión del asunto, notificando oportunamente a las partes a fin de que puedan intervenir si así conviene a sus intereses; asimismo, podrán decretar en todo tiempo la repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que lo estimen necesario. Los hechos notorios no requieren prueba.

precluido su derecho y se citó a las partes a oír sentencia, la cual se emite al tenor de los siguientes capítulos:

4. COMPETENCIA

Este **Tribunal** es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 3 y 7 de **LJUSTICIAADMVAEM**; 1, 4 fracción III, 16, 18 inciso B) fracción II, subinciso I) y disposición transitoria segunda del decreto dos mil quinientos noventa y uno publicado en el periódico oficial 5579 del dieciséis de febrero del dos mil dieciocho y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO** y 196 de la **LSSPEM**.

5. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

La **parte actora** señaló en la demanda inicial y en la ampliación de demanda como actos impugnados los siguientes:

"1) Resolución definitiva de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (se desconoce la fecha exacta de la resolución pues jamás se ha tenido acceso a la misma ni al expediente del cual se emana, únicamente se tiene conocimiento d su existencia derivado de un informe al cual recientemente tuve acceso como se establecerá de manera clara en los hechos de la presente) mediante la cual se declara la baja y/o cese de la relación administrativa que se una con la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dictada dentro del procedimiento administrativo [REDACTED] y

2).la remoción y/o terminación de la relación administrativa que me unía con la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos..."

"... el ilegal pronunciamiento administrativo [REDACTED] mediante el cual se decretó la remoción del suscrito como elemento policiaco..."

"... todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo [REDACTED] [REDACTED]..."

"... Acuerdo de inicio de procedimiento de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada dentro de los autos del procedimiento [REDACTED]..."



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5aSERA/JRAEM-049/2025

"... constancia de notificación de fecha 13 de octubre de 2023, dictada dentro de los autos del procedimiento [REDACTED]" (Sic)

Este **Tribunal** tiene como acto impugnado únicamente la resolución definitiva de fecha [REDACTED] emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente [REDACTED] seguido en contra de la **parte actora**, mediante la cual se le sancionó con la remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización.

Esto es así ya que por cuanto al resto de los actos hechos valer, tanto en la demanda como en la ampliación son el conjunto de actuaciones desahogadas dentro del procedimiento [REDACTED], y que en caso de haberse llevado violaciones en este y de trascender el sentido del fallo, deben de ser atendidas en vía de agravio en el momento en que se lleve a cabo el estudio de la legalidad o ilegalidad en su caso, de la resolución que puso fin a la instancia incoada en su contra, siendo aquí la resolución definitiva [REDACTED] [REDACTED].

Ello cobra vigencia si se toma en cuenta que, en el presente juicio el actor es un elemento de seguridad pública al que se le impuso una sanción, por ello resulta aplicable el artículo 18 inciso B) fracción II, subinciso I) de la **LORGTJAEMO** que dispone:

Artículo *18. Son atribuciones y competencias del Pleno:

B) Competencias:

I) Conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocerá

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, **en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas** por los Consejos de Honor y Justicia, con excepción de las responsabilidades administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

...

(Lo resaltado es de este Tribunal)

De lo cual se advierte la competencia de este órgano colegiado para conocer de las sentencias definitivas y no de actos intraprocesales y así, en el análisis del fallo una vez hechas valer por el demandante, esta autoridad puede conocer y pronunciarse de cualquier violación procesal. En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis jurisprudencial:

VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.⁸

El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisile que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del

⁸ Época: Novena Época; Registro: 185612; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XVI, Octubre de 2002; Materia(s): Común; Tesis: IX.1o. J/10; Página: 1303

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 79/94. Jesús Alonso Rodríguez. 12 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo.

Amparo en revisión (improcedencia) 210/96. José Santos Torres Tovar. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.

Amparo en revisión (improcedencia) 366/96. Lorenzo Sánchez Andrade. 16 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo.

Amparo en revisión (improcedencia) 70/2000. Saúl Torres Alvarado y coag. 9 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos L. Chowell Zepeda. Secretario: Juan Castillo Duque.

Amparo directo 447/2002. José Nicolás Jasso Villalpando. 22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.

Nota: Por ejecutoria de fecha 8 de noviembre de 2006, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 151/2006-PS en que participó el presente criterio.

procedimiento sin mayores obstáculos, **pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio.**"

(Lo resaltado es de este Tribunal)

Bajo esas circunstancias y como se dijo previamente, solo se considerará como acto impugnado la resolución definitiva de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente [REDACTED] seguido en contra de la **parte actora**, mediante la cual se le sancionó con la remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización.

Siendo que su existencia quedó demostrada con las copias certificadas que obran del expediente administrativo [REDACTED], a las cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer párrafo⁹ del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADMVAM** en base a su artículo 7¹⁰, por tratarse de copias certificadas emitidas por autoridad facultada para tal

⁹ **ARTICULO 437.-** Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.

¹⁰ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

efecto.

6. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia, por ser de orden público, deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 párrafo último¹¹ de la **LJUSTICIAADMVAEM**, en relación con lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta potestad en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de la *Ley de Amparo*.

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.¹²

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la Ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente

¹¹ **Artículo 37.** El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

El Tribunal deberá analizar de oficio si concurre alguna causal de improcedencia de las señaladas en este artículo, y en su caso, decretar el sobreseimiento del juicio respectivo.

¹² Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.

es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

Es menester señalar que, si bien los artículos 17 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* y 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la *Convención Americana sobre Derecho Humanos*, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el derecho a ésta última y contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí viola esos derechos.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijan las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y, decidir sobre la cuestión debatida.

Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la **LJUSTICIAADMVAEM** tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulen, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues la obligación de garantizar ese recurso efectivo, no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo.

Este **Tribunal** advierte que, derivado de la precisión del acto impugnado antes sustentada, deriva la causal de improcedencia en contra de las codemandadas Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca; Morelos y H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos; ello en términos de la hipótesis prevista en la fracción XVI del artículo 37¹³ de la **LJUSTICIAADMVAEM**, la cual dispone que el juicio de nulidad es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley.

En este caso dicha improcedencia deriva de lo dispuesto por el artículo 12 fracción II inciso a) de la **LJUSTICIAADMVAEM** que establece que, son partes en el presente juicio:

La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal impugnados...

Porque del acto impugnado ya precisado se advierte fue expedido por el **Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos** y no por Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca; Morelos y H. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, este órgano plural observa que, en el presente juicio opera el **sobreseimiento** del presente juicio en

¹³ **Artículo 37.** El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

XVI. Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

términos de los artículos 37 fracción VII y 38 fracción II de la **LJUSTICIAADMVAEM**; que señalan:

ARTÍCULO 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente:

- VI. Actos que sean materia de otro juicio que se encuentre pendiente de resolución, **promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por el propio acto administrativo reclamado, aunque las violaciones sean distintas;**
- VII. Actos que hayan sido materia de otro juicio, en términos de la **fracción anterior;**

ARTÍCULO 38. Procede el sobreseimiento del juicio:

- II.- Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere esta Ley;

Esto es así, porque de las constancias que integran el presente conflicto se desprende que, el actor refirió haber interpuesto un juicio de amparo indirecto, el cual quedó radicado ante el **Juzgado Octavo de Distrito** con el número de expediente [REDACTED] situación que también fue reconocida por la demandada.

Realizada una búsqueda en el **Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)** del Poder Judicial de la Federación en México, que es una plataforma digital para gestionar y consultar expedientes judiciales de manera remota, se encontró que en dicho expediente en fecha [REDACTED], se resolvió de manera definitiva, accediendo a dicho fallo; en donde de manera medular se resolvió, **negar el amparo y protección de la justicia federal al actor**; misma que se invoca como hecho notorio y que adquiere prueba plena a tenor del siguiente criterio jurisprudencial:

HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).¹⁴

Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de

¹⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2017123; Instancia: Pleno; Décima Época; Materias(s): Común, Tesis: P./J. 16/2018 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10; Tipo: Jurisprudencia.

Contradicción de tesis 423/2016. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 8 de marzo de 2018. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Carlos Alberto Araiza Arreygue.

Tesis y criterios contendientes:

Tesis I.10o.C.2 K (10a.), de título y subtítulo: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).", aprobada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, página 2187.

Tesis (V Región)3o.2 K (10a.), de título y subtítulo: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2181, y

El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 23/2016, y el diverso sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 244/2016.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 16/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citado, aparece publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.



[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

Ahora bien, a continuación, se hace un cuadro

comparativo y un análisis para esclarecer si el Juicio de Amparo Indirecto [REDACTED] y este juicio de nulidad, ambos promovidos por el justiciable cumplen con la hipótesis de improcedencia antes invocada; para lo cual se puede acceder a la guía previamente referida o en su caso a la constancia que obra en autos y que es:

Acuerdo de Admisión del Amparo Indirecto [REDACTED]
interpuesto por el actor, de fecha [REDACTED]
[REDACTED]

REQUISITOS	AMPARO	JUICIO DE NULIDAD
ACTOR	[REDACTED]	[REDACTED]
AUTORIDADES	1. Titular y/o Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. 2. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. 3. Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. 4. Secretario de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. 5. Titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Estado de Morelos. 6. Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos	1. Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. 2. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos. 3. H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.
ACTO ADMINISTRATIVO	La omisión llamarlo a procedimiento en el que se decretó la orden de baja remoción del quejoso en su cargo de Policía adscrito a la Secretaría de Protección y Auxilio	La resolución definitiva de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio

¹⁵ Mismo que obra a fojas 323 del legajo de copias certificadas del expediente Cuadernillo de Datos Personales del legajo del expediente 234/2023-08.



	Ciudadano de Cuernavaca, Morelos	Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente [REDACTED] seguido en contra de la parte actora
--	----------------------------------	---

Cuadro comparativo del cual se desprende se cumple cabalmente con la condición de que ambos juicios fueron interpuestos por el mismo actor y si bien, en el juicio de amparo indirecto se interpuso en contra de cuatro autoridades no consideradas en el juicio de nulidad, no afecta porque finalmente está inmersa en ambos casos el **Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos**, que como quedó antes disertado es la autoridad responsable. Misma situación acontece con el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, señalado como autoridad demandada en este juicio de nulidad, sin que haya dictado el acto impugnado precisado en líneas anteriores.

Tocante a que sea el propio acto administrativo en ambas instancias, si bien se aprecia a simple vista son diferentes, es importante esclarecer que en los dos juicios se hicieron valer los mismos conceptos de violación o razones de impugnación, lo que deriva de la demanda de amparo, de la demanda de nulidad inicial y de la ampliación de demanda, lo que se visualiza en el siguiente cuadro:

DEMANDA DE AMPARO ¹⁶	DEMANDA DE NULIDAD ¹⁷	AMPLIACIÓN DE DEMANDA ¹⁸
<i>PRIMERO.- Se violan en perjuicio del quejoso el derecho de audiencia consagrado en el</i>	<i>PRIMERO.- Se violan en perjuicio del quejoso el derecho de audiencia consagrado en el</i>	<i>PRIMERO.- Se violan en perjuicio del quejoso el derecho de audiencia consagrado en el</i>

¹⁶ Fojas 305 a 316 de las copias certificadas del expediente administrativo [REDACTED], insertas en el anexo denominado Cuadernillo de Datos Personales.
¹⁷ Fojas 18 a la 28 del expediente principal.
¹⁸ Fojas 170 a la 179.

artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dar de baja y realizar el cese de la relación administrativa laboral que me unía con las autoridades responsables derivado de un procedimiento y resolución donde jamás fui notificado ni llamado, por lo cual no fui debidamente oído y vencido y no obstante lo anterior, las responsables me privaron de mi fuente laboral y sustento, sin haberse seguido las formalidades del procedimiento. Señalan el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, segundo párrafo, Constitucional, pues este es un principio rector del derecho mexicano, el cual establece que nadie podrá ser privado de sus posesiones o derechos sin que antes medie un procedimiento	artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dar de baja y realizar el cese de la relación administrativa laboral que me unía con las autoridades responsables derivado de un procedimiento y resolución donde jamás fui notificado ni llamado, por lo cual no fui debidamente oído y vencido y no obstante lo anterior, las responsables me privaron de mi fuente laboral y sustento, sin haberse seguido las formalidades del procedimiento. Señalan el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, segundo párrafo, Constitucional, pues este es un principio rector del derecho mexicano, el cual establece que nadie podrá ser privado de sus posesiones o derechos sin que antes medie un procedimiento seguido en forma de	artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dar de baja y realizar el cese de la relación administrativa laboral que me unía con las autoridades responsables derivado de un procedimiento y resolución donde jamás fui notificado ni llamado, por lo cual no fui debidamente oído y vencido y no obstante lo anterior, las responsables me privaron de mi fuente laboral y sustento, sin haberse seguido las formalidades del procedimiento. Señalan el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos lo siguiente: Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, segundo párrafo, Constitucional, pues este es un principio rector del derecho mexicano, el cual establece que nadie podrá ser privado de sus posesiones o derechos sin que antes medie un procedimiento seguido en forma de
--	--	--



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

seguido en forma de juicio en el cual la parte demandada tenga la oportunidad de ser emplazada, ofrecer pruebas, emitir sus alegatos y finalmente después de haberse llevado a cabo correctamente todo lo anterior, se emita una sentencia; solo así es como conforme a derecho puede alguien privado de sus posesiones derechos; lo cual en la especie resulta a todas luces vulnerado pues el quejoso en ningún momento fue escuchado dentro del procedimiento del cual deriva la baja y/o cese de mi relación administrativa y/o laboral que me unía con las autoridades responsables. Lo cual resulta violatorio de derechos de la parte quejosa, pues no se ha dado a esta la oportunidad de defensa, pues es únicamente después de ser vencida en juicio que procedería baja y/o cese de mi relación administrativa y/o laboral del que fui objeto. Se destaca que el derecho de audiencia implica que el quejoso pudiera ofrecer pruebas a fin desvirtuar lo pretendido en el procedimiento que se trate, ser oído e su defensa y alegar lo que a su derecho considerara, cuestiones que no se respetaron por parte de las responsables, pues de manera arbitraria fui dado de baja y cesado	<u>juicio en el cual la parte demandada tenga la oportunidad de ser emplazada, ofrecer pruebas, emitir sus alegatos y finalmente después de haberse llevado a cabo correctamente todo lo anterior, se emita una sentencia;</u> solo así es como conforme a derecho puede alguien privado de sus posesiones derechos; lo cual en la especie resulta a todas luces vulnerado pues el quejoso en ningún momento fue escuchado dentro del procedimiento del cual deriva la baja y/o cese de mi relación administrativa y/o laboral que me unía con las autoridades ahora responsables. Lo cual resulta violatorio de derechos de la parte quejosa, pues no se ha dado a esta la oportunidad de defensa, pues es únicamente después de ser vencida en juicio que procedería baja y/o cese de mi relación administrativa y/o laboral del que fui objeto. Se destaca que el derecho de audiencia implica que el quejoso pudiera ofrecer pruebas a fin desvirtuar lo pretendido en el procedimiento que se trate, ser oído e su defensa y alegar lo que a su derecho considerara, cuestiones que no se respetaron por parte de las responsables, pues de manera arbitraria fui dado de baja y cesado de mi fuente laboral sin	juicio en el cual la parte demandada tenga la oportunidad de ser emplazada, ofrecer pruebas, emitir sus alegatos y finalmente después de haberse llevado a cabo correctamente todo lo anterior, se emita una sentencia; solo así es como conforme a derecho puede alguien privado de sus posesiones derechos; lo cual en la especie resulta a todas luces vulnerado pues el quejoso en ningún momento fue escuchado dentro del procedimiento del cual deriva la baja y/o cese de mi relación administrativa y/o laboral que me unía con las autoridades ahora demandadas. Lo cual resulta violatorio de derechos de la parte quejosa, pues no se ha dado a esta la oportunidad de defensa, pues es únicamente después de ser vencida en juicio que procedería baja y/o cese de mi relación administrativa y/o laboral del que fui objeto. Se destaca que el derecho de audiencia implica que el quejoso pudiera ofrecer pruebas a fin desvirtuar lo pretendido en el procedimiento que se trate, ser oído e su defensa y alegar lo que a su derecho considerara, cuestiones que no se respetaron por parte de las responsables, pues de manera arbitraria fui dado de baja y cesado de mi fuente laboral sin
--	--	---

de mi fuente laboral sin previo haberse seguido un procedimiento en contra. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente tesis: ... DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DERER DE CAÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA. ... La anterior demuestra que todo acto que implique una molestia o privación, debe seguir un Procedimiento, el cual debe realizarse con las formalidades esenciales, siendo por tanto que para considerar que se colman dichos requisitos relativos deba existir: 1) La notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa: 3) La oportunidad de alegar, y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; cuestiones que en ningún momentos se efectuaron por parte de las responsables pues se limitaron a la emisión de los actos que se les	previo haberse seguido un procedimiento en contra en el cual se respetaran las formalidades esenciales del procedimiento. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente tesis: ... DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DERER DE CAÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA. ... La anterior demuestra que todo acto que implique una molestia o privación, debe seguir un Procedimiento, el cual debe realizarse con las formalidades esenciales, siendo por tanto que para considerar que se colman dichos requisitos relativos deba existir: 1) La notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa: 3) La oportunidad de alegar, y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; cuestiones que en ningún momentos se efectuaron por parte de las responsables pues se limitaron a la emisión de los actos que se les	previo haberse seguido un procedimiento en mi contra en el cual se respetaran las formalidades esenciales que la ley preve. En apoyo a lo anterior se cita la siguiente tesis: ... DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DERER DE CAÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA. ... La anterior demuestra que todo acto que implique una molestia o privación, debe seguir un Procedimiento, el cual debe realizarse con las formalidades esenciales, siendo por tanto que para considerar que se colman dichos requisitos relativos deba existir: 1) La notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa: 3) La oportunidad de alegar, y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; cuestiones que en ningún momentos se efectuaron por parte de las responsables pues se limitaron a la emisión de los actos que se les
--	--	--



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

<i>audiencia en favor del quejoso.</i>	<i>reclaman sin haber respetado el derecho de audiencia en favor del quejoso.</i>	<i>demanda la nulidad sin haber respetado el derecho de audiencia en favor del suscrito, pues como ya lo mencione me encontraba recluso y sin la posibilidad de ejercer mi debida y libre defensa en contra de las imputaciones realizadas en mi contra por las autoridades demandadas.</i>
SEGUNDO. Las responsables violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, al emitir y ejecutar un acto de baja y cese de mi fuente laboral sin las debidas formalidades exigidas por el artículo 14 segundo párrafo, así como sin la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que a efecto de poder generar un acto de privación debieron cumplirse las formalidades esenciales de un procedimiento a fin de dar certeza jurídica de que el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado, a fin de que el quejoso no quede en estado de indefensión como ocurrió en el caso que nos ocupa. En este sentido establece el segundo	SEGUNDO. Las responsables violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, al emitir y ejecutar un acto de baja y cese de mi fuente laboral sin las debidas formalidades exigidas por el artículo 14 segundo párrafo, así como sin la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que a efecto de poder generar un acto de privación debieron cumplirse las formalidades esenciales de un procedimiento a fin de dar certeza jurídica de que el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado, a fin de que el quejoso no quede en estado de indefensión como ocurrió en el caso que nos ocupa. En este sentido establece el segundo	SEGUNDO. Las responsables violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, al emitir y ejecutar un acto de baja y cese de mi fuente laboral sin las debidas formalidades exigidas por el artículo 14 segundo párrafo, así como sin la debida fundamentación y motivación que exige el artículo 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que a efecto de poder generar un acto de privación debieron cumplirse las formalidades esenciales de un procedimiento a fin de dar certeza jurídica de que el mismo se encuentra debidamente fundado y motivado, a fin de que el quejoso no quede en estado de indefensión como ocurrió en el caso que nos ocupa. En este sentido establece el segundo

párrafo del artículo 14 de la Constitución federal, la obligación de que todo acto que conlleve una afectación hacia el quejoso deba previo a su emisión cumplir con todas formalidades de un procedimiento, cuestiones que no fueron respetadas por parte de las responsables pues de manera arbitraria y sin ser notificado ni oído fui ilegalmente dado de baja y se dio por terminada la relación administrativa que me unía laboralmente con las autoridades responsables.	párrafo del artículo 14 de la Constitución federal, la obligación de que todo acto que conlleve una afectación hacia el gobernado deba previo a su emisión cumplir con todas formalidades de un procedimiento, cuestiones que no fueron respetadas por parte de las demandadas pues de manera arbitraria y sin ser notificado ni oído fui ilegalmente dado de baja y se dio por terminada la relación administrativa que me unía laboralmente con las autoridades demandadas, siendo que tuve la necesidad de interponer un juicio de amparo para de esta manera informarme que efectivamente habían realizado un ilegal procedimiento en mi contra, asimismo tuvo que ser requerimiento de autoridad federal que las autoridades demandadas informaron de manera real y formal el número de procedimiento que se siguió en contra del suscrito, sin que jamás me haya notificado, violentando a todas luces mis derechos.	párrafo del artículo 14 de la Constitución federal, la obligación de que todo acto que conlleve una afectación hacia el gobernado deba previo a su emisión cumplir con todas formalidades de un procedimiento, cuestiones que no fueron respetadas por parte de las demandadas pues de manera arbitraria y sin ser notificado ni oído fui ilegalmente dado de baja y se dio por terminada la relación administrativa que me unía laboralmente con las autoridades demandadas, siendo que tuve la necesidad de interponer un juicio de amparo para de esta manera informarme que efectivamente habían realizado un ilegal procedimiento en mi contra, asimismo tuvo que ser requerimiento de autoridad federal que las autoridades demandadas informaron de manera real y formal el número de procedimiento que se siguió en contra del suscrito, sin que jamás me haya notificado, violentando a todas luces mis derechos.
Asimismo, se violan los principios de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal pues al no haberseme notificado ni informado de los fundamentos motivos por los cuales la autoridad responsable me dio de baja separándome de mi fuente de empleo.	Asimismo, se violan los principios de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal pues al no haberseme notificado ni informado de los fundamentos motivos por los cuales la autoridad responsable me dio de baja separándome de mi fuente de empleo.	Asimismo, se violan los principios de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Federal pues al no haberseme notificado ni informado de los fundamentos motivos por los cuales la autoridad responsable me dio de baja separándome de mi fuente de empleo.



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Siendo este un requisito necesario establecido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Epoca Séptima Época. Registro: 394216, Instancia. Segunda Sala, Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis 260. Página 73 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Asimismo, cabe señalar que los actos realizados por parte de las responsables no cuentan con los siguientes tres requisitos a fin de que estos se consideren que fueron emitidos en respeto a la garantía de seguridad jurídica: constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. Cuestión anterior que lo dejo en estado de incertidumbre jurídica al desconocer la causa por la cual se determinó tal situación en contravención a las garantías de legalidad y seguridad que ampara la Constitución Federal. Se cita al respecto la tesis: Época Décima Época Registro 2005777, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito	Siendo este un requisito necesario establecido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Epoca Séptima Época. Registro: 394216, Instancia. Segunda Sala, Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis 260. Página 73 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Asimismo, cabe señalar que los actos realizados por parte de las responsables no cuentan con los siguientes tres requisitos a fin de que estos se consideren que fueron emitidos en respeto a la garantía de seguridad jurídica: constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. Cuestión anterior que lo dejo en estado de incertidumbre jurídica al desconocer la causa por la cual se determinó tal situación en contravención a las garantías de legalidad y seguridad que ampara la Constitución Federal. Se cita al respecto la tesis: Época Décima Época Registro 2005777, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito	Siendo este un requisito necesario establecido por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Federal. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia: Epoca Séptima Época. Registro: 394216, Instancia. Segunda Sala, Tipo de Tesis Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis 260. Página 73 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN Asimismo, cabe señalar que los actos realizados por parte de las responsables no cuentan con los siguientes tres requisitos a fin de que estos se consideren que fueron emitidos en respeto a la garantía de seguridad jurídica: constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. Cuestión anterior que lo dejo en estado de incertidumbre jurídica al desconocer la causa por la cual se determinó tal situación en contravención a las garantías de legalidad y seguridad que ampara la Constitución Federal. Se cita al respecto la tesis: Época Décima Época Registro 2005777, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito
---	---	---

Tipo de Tesis Aislada Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s)), Constitucional Común, Teets: IV 2o.A.50 K (10a), Pagina 2241. SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA ASEGURAR EL RESPECTO A DICHO DERECHO HUMANO ...	Tipo de Tesis Aislada Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s)), Constitucional Común, Teets: IV 2o.A.50 K (10a), Pagina 2241. SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA ASEGURAR EL RESPECTO A DICHO DERECHO HUMANO ...	Tipo de Tesis Aislada Fuente. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s)), Constitucional Común, Teets: IV 2o.A.50 K (10a), Pagina 2241. SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA ASEGURAR EL RESPECTO A DICHO DERECHO HUMANO ...
TERCERO. concatenado a los agravios anteriores se violenta en mi perjuicio, el procedimiento que la Ley especial de la materia contempla, siendo este el previsto en el 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el cual establece los lineamientos que la Unidad de Asuntos Internos debe seguir para poder dar de baja a un elemento perteneciente a una corporación Policial, los cuales se transcriben para efecto de ilustración. Artículo 171 ... Procedimiento que acorde a la fracción segunda debió notificarse de manera	TERCERO. concatenado a los agravios anteriores se violenta en mi perjuicio, el procedimiento que la Ley especial de la materia contempla, siendo este el previsto en el 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el cual establece los lineamientos que la Unidad de Asuntos Internos debe seguir para poder dar de baja a un elemento perteneciente a una corporación Policial, los cuales se transcriben para efecto de ilustración. Artículo 171 ... Procedimiento que acorde a la fracción segunda debió notificarse de manera	TERCERO. concatenado a los agravios anteriores se violenta en mi perjuicio, el procedimiento que la Ley especial de la materia contempla, siendo este el previsto en el 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, el cual establece los lineamientos que la Unidad de Asuntos Internos debe seguir para poder dar de baja a un elemento perteneciente a una corporación Policial, los cuales se transcriben para efecto de ilustración. Artículo 171 ... Procedimiento que acorde a la fracción segunda debió notificarse de manera



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

personal y previa citación del suscrito, expresando de manera clara que facción o fracciones del artículo 159 de la misma ley se me imputaban, pues al tratarse de Derecho Administrativo sancionador la autoridad debe ser clara y precisa de sus actos, que nunca aconteció. Pues en el caso en concreto la autoridad señalada como ordenadora debió sesionar de manera extraordinaria ante el Consejo de Honor y Justicia para efecto de que conforme a lo previsto de la fracción I, del artículo 197, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, se decretara la suspensión temporal del suscrito de las funciones como personal de seguridad Pública, por haber sido vinculado a proceso, sin que dicha suspensión significara la terminación de la relación administrativa, como claramente lo prevé el citado artículo en su primer párrafo. Artículo 197. Circunstancias las anteriores que no fueron obedecidas por la autoridad demandada trasgrediendo derechos que como personal de seguridad pública tengo. De la misma manera la autoridad responsable dejó de obedecer lo previsto en el artículo 198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de	personal y previa citación del suscrito, expresando de manera clara que facción o fracciones del artículo 159 de la misma ley se me imputaban, pues al tratarse de Derecho Administrativo sancionador la autoridad debe ser clara y precisa de sus actos, que nunca aconteció. Pues en el caso en concreto la autoridad señalada como ordenadora debió sesionar de manera extraordinaria ante el Consejo de Honor y Justicia para efecto de que conforme a lo previsto de la fracción I, del artículo 197, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, se decretara la suspensión temporal del suscrito de las funciones como personal de seguridad Pública, por haber sido vinculado a proceso, sin que dicha suspensión significara la terminación de la relación administrativa, como claramente lo prevé el citado artículo en su primer párrafo. Artículo 197. Circunstancias las anteriores que no fueron obedecidas por la autoridad demandada trasgrediendo derechos que como personal de seguridad pública tengo. De la misma manera la autoridad responsable dejó de obedecer lo previsto en el artículo 198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de	personal y previa citación del suscrito, expresando de manera clara que facción o fracciones del artículo 159 de la misma ley se me imputaban, pues al tratarse de Derecho Administrativo sancionador la autoridad debe ser clara y precisa de sus actos, que nunca aconteció. Pues en el caso en concreto y dadas las circunstancias de hecho del caso que nos ocupa, lo correcto que debió realizar la autoridad demandada fue sesionar de manera extraordinaria ante el Consejo de Honor y Justicia para efecto de que conforme a lo previsto de la fracción I, del artículo 197, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, se decretara la suspensión temporal del suscrito de las funciones como personal de seguridad Pública, por haber sido vinculado a proceso, sin que dicha suspensión significara la terminación de la relación administrativa, como claramente lo prevé el citado artículo en su primer párrafo. Artículo 197. Circunstancias las anteriores que no fueron obedecidas por la autoridad demandada trasgrediendo derechos que como personal de seguridad pública tengo. De la misma manera la autoridad responsable dejó de obedecer lo previsto en el artículo
---	---	--

Morelos, mismo que establece: Artículo 198.- ... Circunstancias que en el caso en concreto no acontecieron, pues jamás se me notificó del inicio de algún procedimiento administrativo en mi contra, ni se me dio oportunidad de ejercer mi derecho de audiencia y defensa, así mismo se dejaron vulnerados mis derechos que como personal perteneciente a seguridad pública tengo, y se encuentran establecidos en el artículo 197 y 198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. (Sic)	Morelos, mismo que establece: Artículo 198.- ... Circunstancias que en el caso en concreto no acontecieron, pues jamás se me notificó del inicio de algún procedimiento administrativo en mi contra, ni se me dio oportunidad de ejercer mi derecho de audiencia y defensa, así mismo se dejaron vulnerados mis derechos que como personal perteneciente a seguridad pública tengo, y se encuentran establecidos en el artículo 197 y 198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.	198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mismo que establece: Artículo 198.- ... Circunstancias que en el caso en concreto no acontecieron, pues jamás se me notificó del inicio de algún procedimiento administrativo en mi contra, ni se me dio oportunidad de ejercer mi derecho de audiencia y defensa, así mismo se dejaron vulnerados mis derechos que como personal perteneciente a seguridad pública tengo, y se encuentran establecidos en el artículo 197 y 198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.
	CUARTO. Por otro lado y por cuanto hace a las pretensiones autónomas inherentes al nombramiento al cual fui objeto y señaladas en el apartado respectivo. son procedentes ya que las mismas no se me fueron pagadas y emanan de un procedimiento ilegal que violenta mis derechos fundamentales. Mismas que se generan al ser reconocidas por todos los servidores públicos de las dependencias demandadas, independientemente de la naturaleza del nombramiento. Más aún el artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos establece que las instituciones de	CUARTO. Por otro lado y por cuanto hace a las pretensiones autónomas inherentes al nombramiento al cual fui objeto y señaladas en el apartado respectivo. son procedentes ya que las mismas no se me fueron pagadas y emanan de un procedimiento ilegal que violenta mis derechos fundamentales. Mismas que se generan al ser reconocidas por todos los servidores públicos de las dependencias demandadas, independientemente de la naturaleza del nombramiento. Más aún el artículo 105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos establece que las instituciones de



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

seguridad pública deberán garantizar, al menos. Las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos. En ese sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prestaciones a que a que tienen derecho tales trabajadores, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, etcétera. Por tanto, la expresión "demás prestaciones a que tenga derecho" establecida en la Constitución debe referirse a las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y la que nos ocupa, más aún de las consagradas en la Lev de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Finalmente al ser procedentes las pretensiones reclamadas y derivadas del actuar de las demandadas es por ello que deben ser condenadas al pago y cumplimiento de las mismas, pues es la única forma en que puedo ser restituido de mis derechos. De igual forma, lo reafirman los siguientes criterios jurisprudenciales de	seguridad pública deberán garantizar, al menos. Las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos. En ese sentido, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prestaciones a que a que tienen derecho tales trabajadores, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, etcétera. Por tanto, la expresión "demás prestaciones a que tenga derecho" establecida en la Constitución debe referirse a las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y la que nos ocupa, más aún de las consagradas en la Lev de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Finalmente al ser procedentes las pretensiones reclamadas y derivadas del actuar de las demandadas es por ello que deben ser condenadas al pago y cumplimiento de las mismas, pues es la única forma en que puedo ser restituido de mis derechos. De igual forma, lo reafirman los siguientes criterios jurisprudenciales de
---	---

	carácter obligatorio emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito que a continuación, se transcriben:	carácter obligatorio emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito que a continuación, se transcriben:
--	--	--

Ahora bien, como se aprecia de dicho cuadro comparativo, prácticamente fueron los mismos razonamientos que el actor hizo valer en el juicio de amparo como ante esta autoridad administrativa, con algunas adecuaciones que no modifican de fondo sus argumentos de impugnación.

En el entendido que, las razones de impugnación del capítulo cuarto, si bien no las hizo valer ante la autoridad federal de amparo, estos son propios del pronunciamiento de este órgano jurisdiccional al tratarse de pretensiones que entran dentro del ámbito de posibles prestaciones que le podrían corresponder por la relación que guardó como elemento policial con la demandada y que, serán motivo de estudio en líneas posteriores.

Asimismo, también se observa que en ese mismo apartado hizo valer argumentos direccionados al fondo del asunto; mismos que no difieren de aquellos que hizo valer ante la autoridad federal; ya que solo los hizo valer con otras palabras.

En esa lógica jurídica se procederá ahora hacer un cuadro comparativo de la manera en que el **Juzgado Octavo de Distrito** en el expediente [REDACTED] se pronunció tocante a los agravios que expuso en su demanda de amparo:

GENERALIDADES	PRONUNCIAMIENTO
I.- Señala que la autoridad responsable	[40] Son <i>infundados</i> dichos conceptos de violación, atento a las siguientes consideraciones.



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

transgrede el artículo 14 constitucional, en razón de que al dar de baja y realizar el cese de la relación administrativa laboral que lo unía con las autoridades responsables, derivado de un procedimiento donde jamás

fue notificado ni llamado, significa que no fue debidamente oído y vencido.

II.- Que se transgreden en su perjuicio los principios de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, pues al no haberse notificado, no se le informó de los fundamentos y motivos por los cuales la autoridad responsable le dio de baja separándolo de su fuente de trabajo.

III. Asimismo, señala en su tercer concepto de violación que la autoridad responsable transgredió el artículo 171, fracción II, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, puesto que debió notificarse de manera personal y previa la citación del quejoso, expresando de manera clara que fracción o fracciones del artículo 159 de la misma ley se le imputaban, ya que al tratarse del derecho administrativo sancionador la autoridad debe ser

[41] El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (...)"

[42] Debe considerarse que para cumplir con los extremos del párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Federal, es necesario que, previo al dictado de un acto de privación, las autoridades lleven a cabo un procedimiento o juicio que, ineludiblemente, debe observar distintas etapas que configuran el derecho de audiencia en favor de los gobernados; a saber, que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento, de la cuestión objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar su defensa a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una afirmación la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrarlo; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y; finalmente, que el procedimiento concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.

[43] Respecto al alcance de tal derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe la obligación por parte de las autoridades responsables para dar oportunidad a los quejosos de exponer todo cuanto consideren conveniente en defensa de sus intereses.

"AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA."

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."

[44] Por otra parte, el diverso artículo 16 constitucional establece:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,

clara y precisa en la fundamentación de sus actos, circunstancia que no aconteció.

IV. Manifiesta que la autoridad responsable debió sesionar de manera extraordinaria ante el Consejo de Honor y Justicia, para efecto de que conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 197 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, se decretará la suspensión temporal del quejoso de las funciones como personal de seguridad pública, por haber sido vinculado a proceso, sin que dicha suspensión significara la terminación de la relación administrativa, como lo prevé el citado numeral en su primer párrafo.

V. Finalmente, señala que la autoridad responsable no cumplió con lo previsto en el artículo 198 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, porque jamás se le notificó del inicio de procedimiento administrativo en su contra, ni se le dio oportunidad de ejercer su derecho de audiencia y defensa.

[36] Al respecto, los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa resultan **infundados**, por lo que debe **negarse** el amparo solicitado, sin que se esté en el

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo (...).

[45] Tal precepto, impone la obligación de todas las autoridades de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, y en atención a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo que debe entenderse por cada uno de esos conceptos.

[46] Determinó que la fundamentación consiste en expresar los preceptos legales aplicables al caso, y la motivación en señalar, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.

[47] Además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

[48] Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

...

[49] Ahora bien, el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece:

“Artículo 171.- ...

;

[...]

VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado.”.

[50] Del precepto transcrito, en su fracción I, se establece que para el dictado del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo la unidad de asuntos internos correspondiente tendrá quince días hábiles a partir del momento en que fue recibida la queja o denuncia, para integrar la investigación relativa; por su parte, en la fracción

II, señala que concluido el término antes precisado, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo.



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

supuesto de suplir la queja deficiente, toda vez que el procedimiento administrativo de donde deriva el acto reclamado se refiere a una cuestión de responsabilidad administrativa, por tanto, no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

[37] En efecto, el acto reclamado en el juicio de origen, fue emitido en un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra del servidor público aquí quejoso, por lo que el régimen al que está sujeto a virtud del ejercicio de una función pública es de estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal, antes numeral 113, párrafo primero, por lo tanto es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciñe a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos, no opera la suplencia de la queja.

[38] Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2013378, de rubro y texto siguientes:

[51] Asimismo, se obtiene que la Ley de la materia, no regula las formalidades de la citación prevista en el procedimiento administrativo que nos ocupa; por lo que es menester acudir, conforme a la última de las fracciones transcritas, a lo dispuesto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de aplicación supletoria.

"De las Notificaciones, plazos y Términos (...)"

Artículo 25. Las partes en el juicio en el primer escrito o diligencia en la que comparezcan deberán designar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca. De no contar con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, deberán señalar una cuenta de correo electrónico, en caso (sic) las autoridades demandadas, el correo debe ser de carácter institucional.

Cuando las partes no señalen domicilio para oír notificaciones o lo señale (sic) fuera de la ciudad de Cuernavaca, ni correo electrónico, éstas, aún las de carácter personal, se le notificarán por lista en los términos previstos por esta Ley.

En tanto no se haga nueva designación de domicilio para oír notificaciones, éstas se seguirán practicando en el domicilio originalmente señalado, a menos que éste no exista o se encuentre desocupado, en cuyo caso, las resoluciones o acuerdos se le notificarán por Lista de Acuerdos.

En caso de que en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentre cerrado o se nieguen a recibir la notificación, se deberá dejar aviso de domicilio, en el que se señale los datos de identificación del juicio, la parte a la que se va a notificar, y la fecha del auto a notificarse, con el aviso de que debe comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, ante las oficinas de la Sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa para notificarse personalmente, en caso de que no acuda al lugar indicado en el plazo antes señalado, la notificación del acuerdo o resolución se le hará al día siguiente por medio de la "Lista de Acuerdos" que se fija en los estrados de la Sala que corresponda."

[52] Acorde al marco normativo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que las autoridades responsables actuaron en apego a los derechos fundamentales del quejoso, porque el procedimiento de remoción en contra de ***** el cual se registró con el número ***** fue iniciado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por las autoridades competentes

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL.

....

[39] En ese sentido, se procede a analizar en su conjunto los conceptos de violación identificados bajo los numerales I, II, III y V, ello toda vez que se encuentran estrechamente relacionados con la transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el procedimiento administrativo de remoción en contra del aquí quejoso.

para ello; es decir, por la **Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano**, como superior jerárquico del quejoso (fojas 214 a 223 del anexo).

[53] A través del oficio ***** de **veintiuno de septiembre de dos mil veinticuatro**, la **Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano**, comunicó al Subsecretario de Policía Preventiva de dicha Secretaría, el inicio del referido procedimiento en contra del nombrado quejoso, a efecto de que notificaran al aquí quejoso, con la finalidad de que se presentara ante la Dirección de Asuntos Internos en el día y hora señalados (foja 224 ídem).

[54] Asimismo, por oficio ***** de **veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés**, el **Subsecretario de Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano**, comunicó a la **Directora de Asuntos Internos de dicha Secretaría**, que no era posible notificar al elemento policial, aquí quejoso, toda vez que de acuerdo a la fatiga de personal de guardia segundo turno, se desprendía que dicho elemento, se encontraba faltando desde el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés (fojas 225 y 226).

[55] A dicho oficio, recayó el acuerdo de **veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés**, en el que la **Directora de Asuntos Internos de dicha Secretaría**, tuvo por informado lo anterior, y ordenó girar oficio al **Director General de Centros Penitenciarios** para estar en posibilidad de realizar la notificación al aquí quejoso, debido a que con anterioridad se le comunicó que se le había impuesto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en audiencia de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación en el hecho delictivo de robo de vehículo automotor agravado (foja 227 ídem).

[56] Asimismo, por acuerdo de **doce de octubre de dos mil veintitrés**, se ordenó comisionar a ***** como actuario notificador para que el día viernes trece de octubre de dos mil veintitrés, se presentara en las inmediaciones del "CERESO" para realizar la notificación al citado elemento policial, consistente en el cierre de investigación del expediente administrativo *****

[57] El trece de octubre de dos mil veintitrés, la responsable pretendió notificar al aquí quejoso ***** el inicio del procedimiento administrativo, sin embargo, el referido quejoso se negó a recibir y firmar la cédula de notificación personal de cuatro de septiembre de la citada anualidad y a recibir el juego de copias certificadas correspondientes al expediente administrativo de



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

origen, pues manifestó que su abogado no le había comentado de ninguna visita y tenía esas indicaciones de su parte; tal y como se advierte de la razón de notificación de la misma fecha (**fojas 231 a 234 ídem**).

[58] Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, la Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, conforme al artículo 25, párrafo tercero, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de aplicación supletoria en el procedimiento administrativo, ordenó notificar la cédula de notificación personal por estrados, ello en razón de la imposibilidad material de dejar aviso al interior del "CERESO", por la naturaleza del Centro Penitenciario, así como encontrarse fuera de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

[59] El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se notificó por estrados al aquí quejoso el acuerdo de inicio de procedimiento de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 235 a 246 ídem).

[60] Enseguida, el tres de noviembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 171, fracción III, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se ordenó abrir el periodo probatorio, dentro del término de cinco días hábiles; con el apercibimiento que una vez terminado dicho plazo, no se admitiría ningún medio de convicción, a excepción aquellas que fueran supervinientes; acuerdo que se notificó por estrados en esa misma fecha (fojas 247 y 248 ídem).

[61] El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, sin la presencia del elemento policial, aquí quejoso (foja 251 ídem).

[62] El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Ayuntamiento Municipal, resolvieron el procedimiento administrativo de remoción y determinaron que *** incurrió en la fracción V del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos que establece: "V. Resolución de autoridad competente que le impida continuar con el desempeño material de su servicio; es decir, el auto de vinculación a proceso de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por lo que, decretaron su remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización (fojas 254 a 267 ídem).**

[63] Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintitrés, se declaró que la resolución definitiva de

remoción antes precisada había causado ejecutoria (foja 282 ídem).

[64] El nueve de enero de dos mil veinticuatro, el Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, comunicó a la Directora de Asuntos Internos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, que el Director de Registros de Seguridad Pública había realizado el registro en la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (R.N.P.S.P.), de la sanción impuesta al elemento policial ***** remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización (foja 299 ídem).

[65] Los anteriores medios de prueba, permiten afirmar que, las autoridades cumplieron con el procedimiento de investigación contemplado en el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, lo que se advierte de las constancias que adjuntaron las responsables del expediente administrativo ***** , puesto que tienen la naturaleza de documentales públicas en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al encontrarse certificados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; por tanto, al tener pleno valor en términos del 202 de esa norma adjetiva, su alcance probatorio permite tener por demostrada, que el procedimiento de remoción del cargo o empleo que venía desempeñando la parte quejosa ***** , como elemento de policía de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, derivó del procedimiento administrativo que siguió cada una de sus etapas de conformidad con la normatividad mencionada.

[66] Máxime que, las autoridades responsables demostraron haber otorgado a la parte quejosa la oportunidad de ser oído en un procedimiento, previo a la destitución de su cargo público; es decir, a pesar de que el quejoso se negó a ser notificado del inicio de procedimiento [pues por su dicho señaló que su abogado no le había comentado de ninguna visita y tenía indicaciones de él de no recibir ni firmar ningún documento], ante su evasiva procedieron a realizar la notificación por lista fijada en los estrados de la responsable, como lo dispone el artículo 25 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, de aplicación supletoria a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

[67] Finalmente, en el concepto de violación reseñado en el numeral IV, la parte quejosa señala que conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 197 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, las autoridades responsables

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

	debieron decretar la suspensión temporal del quejoso de las funciones como personal de seguridad pública, por haber sido vinculado a proceso, sin que dicha suspensión significara la terminación de la relación administrativa, como lo prevé el citado numeral en su primer párrafo. [68] Es ineficaz dicho motivo de disenso, en razón de lo siguiente. [69] El artículo 197, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es del tenor literal siguiente: “Artículo 197. La suspensión temporal del personal de seguridad pública, no significa la terminación de la relación administrativa, y procede en los siguientes casos: I. La prisión preventiva del personal de seguridad pública, seguida de sentencia absolutoria. <u>Si el personal actuó en defensa de su jefe inmediato o de los intereses de la institución de seguridad pública, tendrá el derecho a recibir los salarios que hubiese dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad;</u> (...)” [70] El precepto transcrito establece que la suspensión temporal del personal de seguridad pública procede en los casos en que éstos se encuentren en prisión preventiva, seguida de sentencia absolutoria. [71] Asimismo, el citado dispositivo establece como un derecho que quienes hayan actuado en defensa de su jefe inmediato o de los intereses de la institución que podrán recibir los salarios que hubiesen dejado de percibir durante el tiempo en que estuvieron privados de su libertad; esta actuación debe ser entendida como aquélla que despoja en el ejercicio de sus funciones, no de manera indiscriminada, de tal suerte que el ente de seguridad pública asume cierta responsabilidad frente al servidor público y recompensa su actuar, que debe ser entendido siempre como un bien común y no particular, por lo que no se privilegian conductas clasificadas como delictivas en beneficio de unos cuantos, es decir, con la finalidad de satisfacer intereses personales. [72] Con otras palabras, el artículo 197, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es aplicable de forma específica a los elementos de seguridad pública del Estado de Morelos, el cual establece como condición a efecto de que aquél elemento de seguridad pública que fuere privado de su libertad y que esto haya sido
--	--

derivado de acciones que tuvieron origen en la defensa de su jefe inmediato o de los intereses de la institución de seguridad pública.

[73] En ese sentido, el quejoso no se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 197, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues su actuar (**auto de vinculación a proceso de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés**) no tuvo como finalidad la defensa de su jefe inmediato ni la de los intereses de la institución de seguridad pública, sino que tuvo relación con hechos ajenos de la carpeta judicial ***** , por el delito de robo de un vehículo automotor.

[74] De ahí que, en nada le beneficie la prueba documental que adjuntó a su demanda de amparo, consistente en la boleta de libertad de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, relativa a la causa penal ***** , pues no basta que se hubiera demostrado la absolución decretada en dicha causa, sino que era requisito indispensable que la conducta estuviera relacionada con el ejercicio de sus funciones y no por causas ajenas a ella (**foja 14 del expediente de amparo**).

[75] En consecuencia, en razón de que los conceptos de violación resultaron **infundados**, lo procedente es negar el amparo y protección de la

Justicia de la Unión al quejoso *****
respecto de los actos reclamados a la **Dirección General de Asuntos Internos y del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, Morelos** y otras autoridades, consistente en la resolución dictada el **veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés**, en el procedimiento administrativo ***** , que ordenó **la remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización del aquí quejoso** ***** como Policía adscrito a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, Morelos, así como su ejecución*

[76] **SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. ...**

....

III. DECISIÓN

[77] Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a *****

*** ***** respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando **segundo**, por los

motivos expresados en el diverso **sexto** de la presente resolución.

De lo antepuesto y como se adelantó, el Juez Octavo de Distrito, estudió de fondo los agravios hechos valer en el juicio de amparo indirecto y que como previamente se estableció, resultaron ser los mismos que él invocó ante este **Tribunal**; lo que da como resultado que sea improcedente que esta autoridad de nueva cuenta analice dichas razones de impugnación al ya existir un pronunciamiento. Configurándose como ya se indicó la causal de improcedencia 37 fracción VII y 38 fracción II de la **LJUSTICIAADMVAEM**.

En tal sentido, el presente juicio **se declara improcedente** por operar su **sobreseimiento** con fundamento en los artículos antes invocados.

Es así que, no se entra al estudio de la cuestión de fondo, respecto a la legalidad o ilegalidad del acto impugnado; con sustento en la siguiente jurisprudencia:

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.¹⁹

No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los conceptos de anulación tendientes a demostrar las causales de nulidad de que adolece la resolución impugnada, que constituye el problema de fondo, si se declara el sobreseimiento del juicio contencioso-administrativo.

Ello por lógica conlleva la improcedencia en el presente juicio de la siguiente pretensión hecha valer por la **parte actora**:

¹⁹ Época: Octava Época; Registro: 212468; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 77, Mayo de 1994; Materia(s): Administrativa; Tesis: VI. 2o. J/280; Página: 77
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

a) La nulidad lisa y llana de la resolución definitiva mediante la cual se declaró la baja y/o cese de la relación administrativa dictada dentro del procedimiento administrativo

██████████

7. ANÁLISIS DE PRESTACIONES

En términos del último párrafo del artículo 38 de la **LJUSTICIAADMVAEM**²⁰, como se dijo previamente el presente asunto fue promovido por un miembro de Institución de Seguridad Pública; por tanto, es conducente entrar al estudio de las prestaciones demandadas aún y cuando la acción principal se haya sobreseído.

7.1. Por cuanto a:

7.1.1 La indemnización Constitucional consistente en tres meses de emolumentos;

7.1.2 La indemnización de veinte días por año de remuneración por cada año de servicios; y

7.1.3 El pago de los salarios que dejó de percibir desde la fecha de la separación hasta que se dé cumplimiento total a la sentencia que emita este Tribunal.

En este último rubro el demandante señala que se deben incluir el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, despensa familiar mensual, la afiliación

²⁰ **Artículo 38.** Procede el sobreseimiento del juicio:

Solamente se puede proceder a la condena en prestaciones, en un asunto en donde haya dictado sobreseimiento, en tratándose de la competencia existente para conocer los asuntos emanados de lo dispuesto en el artículo 123 apartado b fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

a un sistema principal de seguridad social como son el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; acceso a Créditos para obtener vivienda el disfrute de un seguro de vida; recibir el equipo material necesario para desempeñar la función; contar con un bono de riesgo, ayuda para transporte; los beneficios derivados de riesgos y enfermedades, maternidad y paternidad, los que hace valer como parte de la restitución que se le debe dar, con motivo del cese ilegal.

Estas resultan **improcedentes** por las siguientes consideraciones:

Dichos conceptos solo son procedentes ante una separación injustificada, lo que en el presente asunto no quedó determinado ante el sobreseimiento del presente asunto.

Esto es así, en términos del artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que dispone:

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y **los miembros de las instituciones policiales, se registrarán por sus propias leyes.**

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. **Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el**

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido

...

(Lo resaltado es de este Tribunal)

Y el artículo 69 de la **LSSPEM**, que dice:

Artículo 69.- Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y sus auxiliares, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización, que será otorgada por un importe de tres meses de salario otorgada por la resolución jurisdiccional correspondiente

(Lo resaltado es de este Tribuna)

Lo sustenta en sentido contrario el siguiente criterio jurisprudencial establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia con número de Registro 2013440, Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.), en Materia Constitucional, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, misma que a la letra señala:

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].

En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII **se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y**, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.

(Lo resaltado es de este Tribunal)

Así las cosas, los emolumentos dejados de percibir o como los denominó el actor salarios reclamados desde la fecha de separación hasta dar cabal cumplimiento a la resolución que se emita, al considerarse estos una restitución de la **parte actora** en el goce de sus derechos, en términos del segundo párrafo del artículo 89 de la **LJUSTICIAADMVAEM** que dispone que las sentencias dejarán sin efecto el acto impugnado y las autoridades responsables quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieren sido indebidamente afectados o desconocidos; sin embargo al haberse sobreseído el presente asunto, es obvio que no ha lugar a una restitución de derechos traducidos en el pago de su retribución diaria ni las prestaciones aducidas hasta la terminación del presente juicio.

En el entendido que, de los preceptos legales precitados y los criterios invocados se desprende la imposibilidad de la reinstalación o reincorporación de los elementos de seguridad pública en la misma institución de seguridad pública o en alguna otra, aún y cuando hubiera obtenido una sentencia favorable, lo que hace **improcedente** la pretensión de la actora de que las autoridades se abstengan de impedirle su libertad de trabajo con el nombramiento que ostenta.

7.2 Leyes que regulan las prestaciones

Se procede al análisis de las demás reclamaciones que demanda la **parte actora**; en el entendido que, corresponde a ésta última acreditar el derecho a recibir las prestaciones reclamadas, ya sea porque las percibía o porque la ley señale que tiene derecho a ellas; si así se hace incumbe a la

demandada demostrar que dio cumplimiento a esas obligaciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 386²¹ **CPROCIVILEM** aplicado supletoriamente, en términos del artículo 7²² de la **LJUSTICIAADMVAEM**, por ser ella quien se encuentra en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarlas y por tratarse de cumplimientos a su cargo y, de colmarse, a ésta le favorece su acreditación.

Por otra parte, se precisa que aquellas prestaciones que resulten procedentes se calcularán con fundamento en lo dispuesto por la **LSEGSOCSP**EM y en lo no previsto por ésta, en la **LSERCIVILEM**²³, lo anterior es así, en términos de lo dispuesto en la **LSSPEM**, que en su artículo 105 establece lo siguiente:

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, **al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos** y generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. Las controversias que se generen con motivo de las prestaciones de seguridad social serán competencia del Tribunal Contencioso Administrativo.

(Lo resaltado no es de origen)

²¹ **ARTICULO 386.-** Carga de la prueba. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Así, la parte que afirme tendrá la carga de la prueba, de sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal.

En casos de duda respecto a la atribución de la carga de la prueba, ésta se rendirá por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla; o, si esto no pudiese determinarse por el Juez, corresponderá a quien sea favorable el efecto jurídico del hecho que deba probarse.

²² **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. **A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos;** en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

²³ Siempre que no vayan en contrario a la naturaleza de la prestación de servicios de los elementos de seguridad pública.

Como se desprende del precepto anterior, los miembros de instituciones de seguridad pública tendrán derecho al menos a las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos; en esta tesitura, la ley que establece las prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado es la **LSERCIVILEM**, pues en su artículo primero indica:

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio...

(Lo resaltado no es de origen)

7.3 Pruebas

En este juicio solo ratificó sus pruebas la actora, siendo las siguientes:

1. **LA DOCUMENTAL.** – Consistente en original de oficio número [REDACTED] emitido dentro de la Causa Penal [REDACTED]
[REDACTED]

2. **LA DOCUMENTAL.** - Consistente en Comprobante Fiscal Digital por Internet, correspondiente al periodo quincenal del primero de agosto de dos mil veintitrés al quince de agosto de dos mil veintitrés, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED]

3. **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES:** Consistente en todas las constancias que integran y acumule el expediente en que se actúa.

4. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. – Consistente en aquellas deducciones que resulten de los hechos conocidos en forma legal y humana.

Para mejor proveer se admitieron las siguientes:

1. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas constantes de ciento diecinueve fojas según su certificación corresponden a al expediente laboral de [REDACTED].

2. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas constantes de trescientos veintisiete fojas según su certificación corresponden al expediente administrativo número [REDACTED] a nombre de [REDACTED].

3. LA DOCUMENTAL. – Consistente en original de memorándum con número [REDACTED] con sello con la leyenda "RECIBIDO" de fecha trece de marzo de dos mil veinticinco.

4. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copia simple de un comprobante fiscal digital por internet, correspondiente al periodo quincenal del primero de diciembre de dos mil veintitrés al quince de diciembre de dos mil veintitrés, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED].

5. LA DOCUMENTAL. – Consistente en Comprobante Fiscal Digital por Internet, correspondiente al periodo del primero de enero de dos

mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED]

6. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copia simple de un comprobante fiscal digital por internet, correspondiente al periodo del primero de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED]

7. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copia simple de memorándum con número [REDACTED] con sello con la leyenda “RECIBIDO” de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

8. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copia simple de un comprobante fiscal digital por internet, correspondiente al periodo quincenal del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés al treinta de noviembre de dos mil veintitrés, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED]

Documentales que se tienen por auténticas al no haber sido objeto de impugnación en los términos establecidos en el artículo 59²⁴ y 60²⁵ de la **LJUSTICIAADMVAEM**; y en lo

²⁴ **Artículo 59.** Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los documentos ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando hubiesen sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los autos.

²⁵ **Artículo 60.** Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la impugnación se tramitará en la vía incidental observándose en su caso lo siguiente:

I. Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, sino que se deberá, fundamentar las causas de impugnación;

dispuesto por el artículo 491²⁶ del **CPROCIVILEM**, aplicable supletoriamente a la ley antes mencionada de conformidad a su numeral 7²⁷, haciendo prueba plena.

7.4 Condiciones de la relación administrativa

Para el efecto de analizar las prestaciones que reclama el actor, resulta primordial determinar la remuneración que percibía el actor, fecha de ingreso y de la terminación de la relación administrativa.

De la demanda presentada por la **parte actora**, se desprende que indicó un salario diario de [REDACTED]

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

II. En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las pruebas relacionadas con la misma;

III. Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento impugnado, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda; al desahogar esta vista, el oferente deberá ofrecer a su vez, las pruebas que se relacionen con la impugnación;

IV. Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto probatorio alguno;

V. Desahogada la vista a que se refiere la fracción III de este Artículo, las Salas citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las partes, los peritos y testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o testimonial;

VI. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las declaraciones y dictámenes respectivos y se dictará resolución;

VII. La Sala tendrá la más amplia libertad para la apreciación de las pruebas en el incidente de impugnación, basándose en los principios generales del derecho, la lógica y la experiencia, y

VIII. Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, éste se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes.

La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno.

²⁶ **ARTICULO 491.-** Valor probatorio pleno de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos indubitables, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las defensas que se aleguen para destruir la pretensión que en ellos se funde.

²⁷ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Monto que la **autoridad demandada** no controvertió; sin embargo, de autos se desprenden las siguientes documentales previamente valoradas:

LA DOCUMENTAL. - Consistente en Comprobante Fiscal Digital por Internet, correspondiente al periodo quincenal del **primero al quince de agosto de dos mil veintitrés**, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED] que ampara un total de percepciones de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

LA DOCUMENTAL. – Consistente en impresión de un comprobante fiscal digital por internet, correspondiente al periodo **quincenal del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil veintitrés**, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED] [REDACTED] que ampara la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] monto al cual se le debe descontar la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] del concepto de Vales de Despensa, ya que por la naturaleza de la norma que la regula artículos 4 fracción III y 28²⁹ de la **LSEGSOCPEM** debe ser

²⁸ Fojas 16 .

²⁹ **Artículo 4.-** A los sujetos de la presente Ley en términos de la misma, se les otorgarán las siguientes prestaciones:

III.- Recibir en especie una despensa o ayuda económica por ese concepto;

Artículo 28. Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete días de Salaric Mínimo General Vigente en la Entidad.

calculada de manera independiente, arrojando como percepción real la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].

LA DOCUMENTAL. – Consistente en impresión de un comprobante fiscal digital por internet, correspondiente al periodo quincenal del primero al quince de diciembre de dos mil veintitrés, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED] [REDACTED] monto al cual se le debe descontar la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] del concepto de “Prima Vac Sueldo”, ya que no es una percepción quincenal ni mensual, sino de dos veces al año y se paga de manera independiente en términos de los artículos 33³⁰ y 34³¹ de la **LSERCIVILEM**, arrojando como percepción real la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

En esa tesitura, quedan las remuneraciones que percibía el demandante de la siguiente forma:

³⁰ **Artículo 33.-** Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-interrumpidos **disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno**, en las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tienen derecho a vacaciones.

³¹ **Artículo 34.-** Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo vacacional.

Tocante a la fecha de ingreso el demandante adujo la del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]; lo cual quedó demostrado con la siguiente copia certificada, previamente valorada, consistente en:

Constancia de Servicios, de fecha quince de junio de dos mil veintidós, suscrita por la Directora General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, donde se afirmó como fecha de ingreso del actor el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

En tal sentido, la fecha de ingreso será la del [REDACTED] [REDACTED]

Ninguna de las partes especificó la fecha de la terminación de la relación administrativa; no obstante, lo anterior, del cúmulo documental que obra en autos, con anticipación valorado consistente en:

LA DOCUMENTAL. – Consistente en impresión de un comprobante fiscal digital por internet, correspondiente al **periodo quincenal del primero al quince de diciembre de dos mil veintitrés**, expedido por el municipio de Cuernavaca a nombre de [REDACTED] [REDACTED] monto al cual se le debe descontar la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] del concepto de "*Prima Vac Sueldo*", ya que no es una percepción

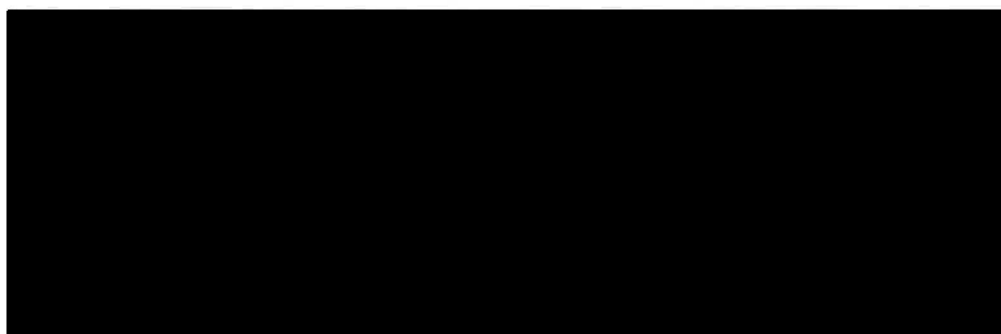
³² Fojas 03 del compendio de fojas certificadas constantes de ciento diecinueve fojas útiles.

³³ Fojas 10 del compendio de copias certificadas constantes de 83 del Expediente Personal del actor, que obran en el Anexo denominado "Cuadernillo de Datos Personales".

quincenal ni mensual, sino de dos veces al año y se paga de manera independiente en términos de los artículos 33³⁴ y 34³⁵ de la **LSERCIVILEM**, arrojando como percepción real la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] \$ [REDACTED]

Se desprende que la última quincena pagada al actor fue hasta el **quince de diciembre de dos mil veintitrés**, de ahí que la fecha de la separación es el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Quedando de la siguiente manera las condiciones de la relación administrativa para el cálculo las prestaciones:



7.5 Prima de antigüedad

El demandante reclama el pago de la prima de antigüedad, hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se emita.

³⁴ **Artículo 33.-** Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios in-interrumpidos **disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno**, en las fechas en que se señalen para ese efecto, pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tienen derecho a vacaciones.

³⁵ **Artículo 34.-** Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo vacacional.

La demandada argumentó que era improcedente porque no cumplía con los requisitos que señala el artículo 46 de la **LSERCIVILEM**.

El artículo 46 fracciones I, II y III de la **LSERCIVILEM**, cuya aplicación ya fue explicada con anterioridad estatuye:

Artículo 46.- Los trabajadores sujetos a la presente Ley, tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

I.- La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario por cada año de servicios;

II.- La cantidad que se tome como base para el pago de la prima de antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, se considerará ésta cantidad como salario máximo;

III.- La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su trabajo independientemente de la justificación o injustificación de la terminación de los efectos del nombramiento; y

IV.- ..."

De ese precepto se desprende que la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su trabajo independientemente de la justificación o injustificación de la terminación de los efectos del nombramiento.

Queda así comprobado el derecho de la **parte actora** a la percepción de ese derecho al haber sido separado de su cargo.

Por lo que el pago de la prima de antigüedad surge con motivo de los servicios prestados únicamente hasta la fecha en que sea separado la **parte actora** de forma justificada o injustificada; por ello es procedente desde el [REDACTED]

[REDACTED] hasta el [REDACTED]
[REDACTED]

Para el cálculo del pago de la prima de antigüedad a razón de doce días de salario, debe hacerse en términos de la fracción II del artículo 46 de la **LSERCIVILEM** antes transcrito, pero al doble de salario mínimo vigente al momento de darse por terminada la relación, ya que como se dijo antes, la percepción diaria de la **parte actora** ascendía a [REDACTED] [REDACTED] y el salario mínimo diario en el año dos mil veintitrés en el cual se terminó la relación con la **parte actora** fue de [REDACTED] [REDACTED] que multiplicado por dos asciende a la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] Sirve de orientación el siguiente criterio jurisprudencial:

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. SU MONTO DEBE DETERMINARSE CON BASE EN EL SALARIO QUE PERCIBÍA EL TRABAJADOR AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.³⁷

En atención a que la prima de antigüedad es una prestación laboral que tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo y el derecho a su otorgamiento nace una vez que ha concluido el vínculo laboral, en términos de los artículos 162, fracción II, 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, **su monto debe determinarse con base en el salario que percibía el trabajador al terminar la relación laboral por renuncia, muerte, incapacidad o jubilación, cuyo límite superior será el doble del salario mínimo general o profesional vigente en esa fecha.**

(El énfasis es de este Tribunal)

Como ya se ha dicho, resulta procedente el pago de la prima de antigüedad a partir del [REDACTED] [REDACTED]

³⁶https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/686336/Tabla_de_Salarios_M_nimos_vigentes_a_partir_del_1_de_enero_de_2022.pdf

³⁷ Tesis de **jurisprudencia** 48/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de marzo de dos mil once. Novena Época. Registro: 162319. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXIII, Abril de 2011, Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 48/2011 Página: 518.

[REDACTED] hasta el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] es decir por el tiempo que duró la relación
administrativa, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], como
se visualiza del siguiente cuadro:

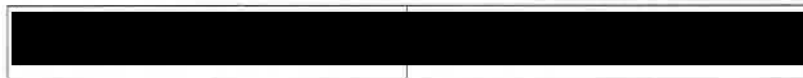


Primero se obtiene el proporcional diario de prima de antigüedad para lo cual se divide 12 (días de prima de antigüedad al año) entre 365 (días al año) de lo que resulta el valor 0.032876 (se utilizan 6 posiciones decimales a fin de obtener la mayor precisión posible en las operaciones aritméticas).

Acto seguido se multiplica el doble del salario mínimo a razón de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] por [REDACTED] (periodo laborado) por 0.032876 (proporcional diario de prima de antigüedad equivalente a 12 días por año).

Cantidad que salvo error u omisión involuntario asciende a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que deberá cubrir la autoridad responsable y que deriva de las siguientes operaciones:





7.6 Registro de la sentencia

El demandante reclama la anotación en el registro Nacional y Estatal del Personal de Seguridad Pública, en el expediente personal y en la hoja de servicios.

El artículo 150 segundo párrafo³⁸ de la **LSSPEM** señala que la autoridad que conozca de cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, notificará inmediatamente al Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública, quien a su vez lo notificará al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.

En esa tesitura, una vez que la presente cause ejecutoria; dese a conocer el resultado del presente fallo al Centro Estatal antes citado para el registro correspondiente, aún y cuando no haya favorable para el actor, por así ordenarlo el precepto legal de referencia.

³⁸ **Artículo 150.-** El Centro Estatal tendrá a su cargo la inscripción y actualización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley General. Cuando a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, o auxiliares de la seguridad pública se les dicte cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos, la autoridad que conozca del caso respectivo notificará inmediatamente al Centro Estatal quien a su vez lo notificará al Registro Nacional. Lo cual se dará a conocer en sesión de Consejo Estatal a través del Secretariado Ejecutivo.

Asimismo, en congruencia con los artículos 98 primer párrafo³⁹ y 181⁴⁰ de la **LSSPEM**, la **autoridad demandada** deberá registrar en el expediente del actor y en la hoja de servicios, la sanción que impuso, además deberá anexar copia certificada de la presente y de aquella que haya emitido el Consejo de Honor y Justicia, una vez que cause estado.

7.7 Hoja de Servicios y Carta de Certificación de Salario

El demandante reclama estas constancias. La demandada adujo que eran improcedentes en la forma en que pretendía reclamarlas, pues nunca las había solicitado.

En ese tenor, se **condena** a la demandada a la entrega de la Hoja de Servicios y la Carta de Salarios, las cuales tienen sustento en la **LSEGSOCSPPEM** que en su artículo 15, fracción I, incisos b) y c)⁴¹ que regulan las pensiones, de lo cual se desprende el derecho de la **parte actora** a su obtención si cumple con los requisitos que impone la ley; la que deberán

³⁹ **Artículo 98.-** La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.

⁴⁰ **Artículo 181.-** Las resoluciones que por votación tome el Consejo de Honor y Justicia, causaran ejecutoria una vez transcurrido el término para impugnar la misma, **y su resolución se agregará a los expedientes personales u hojas de servicio de cada elemento.**

Cuando se imponga suspensión temporal o destitución, se notificará al Sistema Nacional y al Secretariado Ejecutivo, para su control y trámites legales a que haya lugar, su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas por la Ley Estatal de Responsabilidades.

⁴¹ **Artículo 15.-** Para solicitar las pensiones referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por escrito acompañada de la siguiente documentación:

I.- Para el caso de pensión por **Jubilación o Cesantía en Edad Avanzada:**

a).- Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente;

b).- **Hoja de servicios** expedida por el servidor público competente de la Institución que corresponda;

c).- Carta de certificación de la remuneración, expedida por la institución a la que se encuentre adscrito.

ser exhibidas ante este Tribunal y expedidas por la autoridad competente en términos del precepto legal antes indicado.

En la inteligencia que la Hoja de Servicios deberá cubrir únicamente [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7.8 Devolución de documentos originales

La **parte actora** reclamó la devolución de los documentos originales consistentes entre otros, certificados de estudios y cartilla militar.

La demandada contestó que no existe oposición para que le sean devueltos los documentos mencionados y a los que tenga derecho.

Por lo anterior, se **condena** a la autoridad demandada la devolución de la documentación descrita.

7.9 Remuneraciones devengadas

El justiciable demanda el pago de sus emolumentos devengados y no pagados del [REDACTED]
[REDACTED].

La autoridad demandada respondió que este reclamo era improcedente e inatendible con base a que se emitió una resolución por Tribunal competente que le impedía al actor el desempeño de sus funciones, lo que derivó en el procedimiento administrativo correspondiente, con el cual se determinó su remoción.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Pago que resulta **improcedente**, para lo cual es necesario recordar que el actor fue aprehendido el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] porque se le imputó un delito⁴² y dejado en libertad en fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] luego entonces el periodo que reclama se encuentra dentro del tiempo que estuvo en prisión; por tanto, no estuvo prestando sus servicios ni tampoco estuvo bajo la hipótesis del artículo 197 fracción I⁴³ de la **LSSPEM**.

7.10 Diversas reclamaciones

El accionante demandó los siguientes conceptos:

- a) La indemnización por tiempo perdido que prevé el artículo 325⁴⁴ de la *Ley Federal del Trabajo*, de aplicación supletoria hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se dicte.
- b) El reclamo de daño moral que en su momento se cuantifique, mediante el incidente innominado respectivo, hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se dicte.
- c) El pago de interés legal del 9% anual capitalizable de todas y cada una de las pretensiones anteriormente

⁴² Fojas 201 de compendio de copias certificadas de trescientos veintisiete fojas útiles.

⁴³ **Artículo 197.-** La suspensión temporal del personal de seguridad pública, no significa la terminación de la relación administrativa, y procede en los siguientes casos:

I. La prisión preventiva del personal de seguridad pública, seguida de sentencia absolutoria. Si el personal actuó en defensa de su jefe inmediato o de los intereses de la institución de seguridad pública, tendrá el derecho a recibir los salarios que hubiese dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo privado de su libertad;

⁴⁴ **Artículo 325.-** La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido.

señaladas, cuantificadas en dinero y derivado del incumplimiento de la sentencia que dicte esta autoridad, lo anterior en caso de demora injustificada hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se dicte.

Mismas que resultan **improcedentes** porque no existe sustento legal para su reclamo en las leyes que regulan a las corporaciones policiacas; además, en el caso de la señalada con el inciso a), no es aplicable supletoriamente la *Ley Federal del Trabajo*.

7.11 Reparación de los daños y perjuicios

El accionante demandó este concepto.

El artículo 9 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, en la parte que interesa establece:

Artículo 9. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a la condena en costas. Cada una de las partes cubrirá los gastos que hubiese erogado.

La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado **por el importe de los daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada** y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata.

Habrà falta grave cuando:

I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia, "y"

II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.

La condenación en costas o la indemnización establecida en los párrafos segundo y tercero de este artículo se tramitará vía incidental."

(Énfasis realizado por este Tribunal.)

Del precepto legal en cita, se advierte que la **autoridad demandada** deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata.

Ahora bien, el mismo precepto señala los supuestos en que habrá falta grave, ambos deben concurrir y no solo uno de ellos.

Lo anterior tomando en consideración que las fracciones I y II del artículo 9 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, están unidas por la conjunción “y”, que al realizar una búsqueda en la Real Academia Española en línea, en la siguiente liga <http://dle.rae.es/?id=c8HoARq|c8HrfrV|c8IFPyp> consultada el día cuatro de junio del dos mil diecinueve a través de Internet, se define de las siguientes formas:

“(Del latín et)

1. *Conj. Copula. Para unir palabra o cláusulas en concepto afirmativo. Si se coordina más de dos vocablos o miembros del periodo soio se expresa generalmente antes del último. Ciudades, villas, lugares y aldeas. El mucho dormir quita el vigor al cuerpo, embota los sentidos y debilita las facultades intelectuales.*

2. *Conj. Popular. Para tomar grupos de dos o más palabras entre las cuales no se expresa hombres y mujeres, niños :mozos y ancianos, ricos y pobres, todos bien sujetos a las miserias humanas. Se omite a veces por asíndeton. Acude, corre, vuela. Ufano, alegre, altivo, enamorado. Se repite otras por polisíndeton. Es muy ladino y sabe de todo, y tiene una labia.*

3. *Conj. Popular. Al principio de periodo o cláusula sin enlace con vocablo, frase anterior para dar énfasis o fuerza de expresión a lo que se dice ¡Y si no llega a tiempo! ¿Y si fuera por otra causa? ¡Y dejas, pastor santo..!*

4. *Conj. Popular. Denota idea de repetición indefinida, precedida y seguida por una misma palabra. Días y días. Cartas y cartas.”*

De lo anterior se advierte que la conjunción “y” es para unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Del artículo



9 fracción I y II de la **LJUSTICIAADMVAEM**, se advierte dicha conjunción, por lo que, como ya se ha dicho, deben cumplirse ambas hipótesis:

I. Se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia; y:"

Ahora bien, por cuanto al segundo supuesto, del artículo 9 de la ley en cita, mismo que establece:

II. **Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad.** Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave.

Sin que en el presente asunto pueda determinarse la falta de fundamentación o motivación en cuanto al fondo o en la competencia, ni determinar que el comportamiento de la demandada fue contraria a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de la Nación en materia de legalidad, pues como se aprecia se ha resuelto el sobreseimiento del presente juicio y por ende el estudio de fondo de este asunto.

7.12 Impuestos y deducciones

Quedan pendientes de calcularse en el presente asunto los impuestos y deducciones que en derecho procedan, ya que estas no quedan al arbitrio de este **Tribunal** o de alguna de las partes, sino a la ley que las regule; ello en base al siguiente criterio jurisprudencial:

DEDUCCIONES LEGALES. LA AUTORIDAD LABORAL NO ESTÁ OBLIGADA A ESTABLECERLAS EN EL LAUDO.⁴⁵

⁴⁵ Época: Novena Época; Registro: 197406; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo VI, Noviembre de 1997; Materia(s): Laboral; Tesis: I.7o.T. J/16; Página: 346

No constituye ilegalidad alguna la omisión en la que incurre la autoridad que conoce de un juicio laboral, al no establecer en el laudo las deducciones que por ley pudieran corresponder a las prestaciones respecto de las que decreta condena, en virtud de que no existe disposición legal que así se lo imponga, y como tales deducciones no quedan al arbitrio del juzgador, **sino derivan de la ley que en cada caso las establezca, la parte condenada está en posibilidad de aplicar las que procedan al hacer el pago de las cantidades respecto de las que se decretó condena en su contra conforme a la ley o leyes aplicables, sin necesidad de que la autoridad responsable las señale o precise expresamente en su resolución.**

(Lo resaltado es de este Tribunal)

De ahí que, corresponde a la autoridad demandada y a las que deban participar de los actos de ejecución del presente fallo, calcular y realizar las deducciones y retenciones, incluyendo los impuestos y en su caso retenciones que correspondan de conformidad con la normativa vigente.

7.13 Cumplimiento

Se concede a la autoridad demandada **Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, Morelos**, un término de **diez días** para que dé cumplimiento voluntario a lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause ejecutoria; apercibida que, de no hacerlo así, se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo dispuesto por los artículos 90⁴⁶ y 91⁴⁷ de la **LJUSTICIAADMVAEM**.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

⁴⁶ **Artículo 90.** Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliera con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley.

⁴⁷ **Artículo 91.** Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato,

Al cumplimiento de este fallo están obligadas las autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en el presente juicio, por sus funciones deban intervenir en el cumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, se transcribe la tesis de jurisprudencia en materia común número 1a./J. 57/2007, visible en la página 144 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.⁴⁸

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

La condena económica que resultó procedente, se hace con la salvedad de que se tendrán por satisfecha, cuando

procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente:

I. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada;

II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley;

III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y

IV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública.

Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado la versión pública en la Página de Internet del Tribunal.

⁴⁸ Época: Novena Época; Registro: 172605; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tcmo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 57/2007; Página: 144.

dentro de la etapa de ejecución la autoridad demanda acredite con pruebas documentales fehacientes que en su momento fueron pagadas al actor.

Lo anterior, con la finalidad de respetar los principios de congruencia y buena fe guardada que debe imperar entre las partes, pues si las demandadas aportan elementos que demuestren su cobertura anterior a las reclamaciones de la **parte actora**, debe tenerse por satisfecha la condena impuesta, pues de lo contrario se propiciaría un doble pago.

Lo cual guarda congruencia con lo establecido en el artículo 715 del **CPROCIVILEM** de aplicación complementaria a la **LJUSTICIAADMVAEM**, el cual en la parte que interesa establece:

ARTICULO 715.- Oposición contra la ejecución forzosa. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más defensa que la de pago...

8. EFECTOS DEL FALLO

Por las razones expuestas con antelación:

8.1. El presente juicio **se declara improcedente** por operar su **sobreseimiento** en términos de los artículos 37 fracciones VII y 38 fracción II de la **LJUSTICIAADMVAEM**; por tanto, es improcedente declarar la nulidad la resolución definitiva de fecha [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el expediente [REDACTED], seguido en contra de la **parte actora**, mediante

la cual se le sancionó con la remoción sin responsabilidad para la institución y por consiguiente sin indemnización.

8.2. En términos del capítulo siete, es **improcedente** el pago y cumplimiento de los siguientes conceptos:

8.2.1 Las indemnizaciones consistentes en tres meses de emolumentos y la de veinte días por cada año de servicios.

8.2.2 Los emolumentos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, despensa familiar mensual, la afiliación a un sistema principal de seguridad social como son el Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; acceso a Créditos para obtener vivienda el disfrute de un seguro de vida; recibir el equipo material necesario para desempeñar la función; contar con un bono de riesgo, ayuda para transporte; los beneficios derivados de riesgos y enfermedades, maternidad y paternidad que se generen desde la fecha de la separación hasta que se dé cabal y debido cumplimiento a la resolución que este Tribunal dicte.

8.2.3 El pago de sus emolumentos devengados y no pagados del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

8.2.4 La indemnización por tiempo perdido que prevé el artículo 325⁴⁹ de la *Ley Federal del Trabajo*, de aplicación supletoria hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se dicte.

8.2.5 El reclamo de daño moral que en su momento se cuantifique, mediante el incidente innominado respectivo, hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se dicte.

8.2.6 El pago de interés legal del 9% anual capitalizable de todas y cada una de las pretensiones anteriormente señaladas, cuantificadas en dinero y derivado del incumplimiento de la sentencia que dicte esta autoridad, lo anterior en caso de demora injustificada hasta que física y materialmente se cumplimente la sentencia que se dicte.

8.2.7 La Reparación de los daños y perjuicios.

8.2.8 Que se le impida trabajar con el nombramiento que ostentaba como elemento policiaco.

8.3 De conformidad al presente fallo se **condena** a la autoridad demandada **Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Protección y auxilio Ciudadano del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos**, al pago y cumplimiento de los siguientes conceptos:

⁴⁹ **Artículo 325.-** La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una indemnización por el tiempo perdido.



8.3.1 Pago de la Prima de antigüedad por la cantidad de [REDACTED]

8.3.2 Entrega de la Hoja de Servicios y la Carta de Salarios, en términos del presente fallo.

8.3.4 La devolución de los documentos originales consistentes certificados de estudios y cartilla militar, entre otros.

8.4. Dese a conocer el resultado del presente fallo a Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública para el registro correspondiente y se **ordena** registrar en el expediente del actor y en la hoja de servicios, la sanción que se impuso, además deberá anexarse copia certificada de la presente y de aquella que haya emitido el Consejo de Honor y Justicia, una vez que cause estado.

El pago a que fue condenada la demandada, se deberá enterar por medio de transferencia a la Cuenta de Cheques BBVA Bancomer: [REDACTED] Clabe interbancaria BBVA Bancomer: [REDACTED] a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, RFC: [REDACTED] señalándose como concepto el número de expediente **TJA/5aSERA/JRAEM-049/2025**; comprobante que deberá remitirse al correo electrónico oficial: fondoauxiliar.depositos@tjamorelos.gob.mx, y exhibirse ante la Sala del conocimiento de este Tribunal, con fundamento en lo establecido en el artículo 88 apartado B⁵⁰ del *Reglamento*

⁵⁰ **Artículo 88.** Además de los considerados en el artículo 44 de la Ley Orgánica, son recursos del Fondo Auxiliar los siguientes:

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Debiendo la parte actora exhibir su constancia de situación fiscal.

Por lo expuesto y fundado con apoyo en lo dispuesto en los artículos 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18 inciso B fracción II sub inciso I) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO**, 86, 89, 90 y 91 y demás relativos y aplicables de la **LJUSTICIAADMVAEM**; así como lo establecido en el artículo 196 de la **LSSPEM**, es de resolverse al tenor de los siguientes:

9. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este **Tribunal** en Pleno, es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con los razonamientos vertidos en el capítulo cuatro de la presente resolución.

SEGUNDO. Es **improcedente** el presente juicio de nulidad por operar su sobreseimiento en términos de los artículos 37 fracciones VII y 38 fracción II de la **LJUSTICIAADMVAEM**.

TERCERO. Por lo discursado en el presente fallo es **improcedente** el pago y cumplimiento de las prestaciones señaladas en el apartado **8.2**.

CUARTO. Por lo expuesto en la presente sentencia se condena al **Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de**

B. Recursos ajenos, constituidos por depósitos en efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario o en valores, que por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito correspondiente se realicen o se hayan realizado ante las Salas.



Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Cuernavaca, Morelos al pago y cumplimiento de los conceptos señalados en el apartado 8.3.

QUINTO. Dese a conocer el presente fallo al Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública y se ordena registrar en el expediente del actor y en la hoja de servicios, la sanción que impuso, además deberá anexarse copia certificada de la presente y de aquella que haya emitido el Consejo de Honor y Justicia, una vez que cause estado.

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

10.- NOTIFICACIONES

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, como legalmente corresponda.

11. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrada **MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrada **VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y ponente en el presente

asunto; Magistrada **KARLA SOCORRO REYES REYES**, Titular de la Sexta Sala de Instrucción y Magistrada **CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR**, Titular de la Séptima Sala de Instrucción; en términos de la Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos* y de la *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; ante **ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.**

MAGISTRADO PRESIDENTE



GUILLERMO ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA



MONICA BOGGIS TOMASAZ MERINO

TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5aSERA/JRAEM-049/2025

MAGISTRADA

VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS

TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO

MANUEL GARCÍA QUINTANAR

TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

MAGISTRADO

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO

TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

MAGISTRADA

KARLA SOCORRO REYES REYES

TITULAR DE LA SEXTA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA

CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR

TITULAR DE LA SÉPTIMA SALA DE INSTRUCCIÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número **TJA/5ºSERA/JRAEM-049/2025** interpuesta por [REDACTED] en contra del **DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CUERNAVACA, MORELOS Y OTRAS**; misma que es aprobada en Pleno de fecha veinte de mayo de dos mil veintiséis. **CONSTE.**

AMRC.